

PARAGUAY: ESPEJO DE LA FRAGILIDAD DE LAS DEMOCRACIAS LATINOAMERICANAS

Paraguay: reflection of the fragility of Latin American democracies

François Reman¹
francoisreman@hotmail.com

Recibido: 21 de octubre de 2012
Aprobado: 15 de noviembre de 2012

I. INTRODUCCIÓN

No es arriesgado afirmar que las democracias latinoamericanas se «portan mejor» que hace 20 años. No resulta excesivo aseverar esto si comparamos la situación actual con la de los años 80; esa década perdida en la que los Estados eran carcomidos por dictaduras militares, por guerras civiles o bien debilitados por las reformas neoliberales impuestas por las organizaciones financieras internacionales. En ese entonces, los indicadores democráticos estaban al rojo vivo, la inflación galopaba por el continente y los Estados abandonaban gran parte de sus prestaciones en beneficio del sector privado, lo que terminó por crear un escenario de inseguridad social que hoy aún se aprecia. Dos décadas después, el panorama se vislumbra con algo más de optimismo, sin embargo parece necesario mantener la prudencia mientras las democracias latinoamericanas sigan siendo frágiles en numerosos aspectos.

A pesar de todo, hay que reconocer que los procesos de transición democrática, puestos en marcha para salir de las dictaduras, permitieron que se instalaran regímenes democráticos que se fueron consolidando con el transcurso de los años. Asimismo, los resultados de las reformas económicas, impuestas por las organizaciones internacionales, generaron equilibrios macroeconómicos. A esta estabilidad económica se le sumó el aumento sustancial, a nivel internacional, de la demanda por materias primas. Esta tendencia permitió a varios países coquetear –por algún tiempo– con un crecimiento superior al 5%, y disipar –de momento– cualquier amenaza de nueva crisis económica sobre la región.

Entre 2005 y 2008, las elecciones presidenciales de varios países condujeron al poder a jefes de Estado que, con un estilo diferente y éxitos contrastados, manifestaron una ruptura con el ciclo político y económico anterior. Su objetivo fue el de configurar políticas sociales –ya sea institucionalmente como en Brasil o Argentina, o bien de una manera más confusa como en Venezuela– enfocadas a aliviar a las poblaciones más afectadas por las políticas y rigores económicos. Además, los procesos electorales que hicieron ganar a estos jefes de

¹ Periodista, corresponsal en Chile del diario belga La Libre Belgique. Alumno del Magister en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos, Universidad Alberto Hurtado.

Estado se inscribieron en nuevas dinámicas de participación ciudadana², las cuales, según el especialista francés en la región Alain Rouquié (2010), «expresaron exigencias de ciudadanía y de integración social». A nivel internacional, la región ahondó su proceso de integración, el cual sigue siendo vacilante y no se sostiene sobre ninguna visión definida a largo plazo, pero al menos permite a numerosos países distanciarse de la influencia de Estados Unidos. Finalmente, el tema de la defensa de los derechos humanos se presenta como un valor fundamental en las democracias latinoamericanas. Aunque todavía existan algunas zonas oscuras, como en el caso de Colombia, hay cierto consenso en el sentido de velar para que no se vuelvan a reproducir los abusos cometidos durante los 70 y 80.

El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y la OEA (Organización de los Estados Americanos) publicaron en el año 2010 un segundo estudio sobre el estado de las democracias en América Latina. Este documento destaca los avances democráticos realizados en el continente para salir de las dictaduras militares; sin embargo, también indica –y con razón– que el haber superado la amenaza militarista no implica automáticamente la consolidación de la democracia. Según los autores de dicho documento, actualmente se estaría abriendo, en el proceso de democratización, una fase más compleja llamada «postransición». La característica principal de esta ya no está ligada al pasado militar de la región, sino a la dificultad de extender los derechos de los ciudadanos frente a la concentración del poder político que se opone a las reformas democráticas. Este marco de las realidades latinoamericanas puede, sin duda, aplicarse a la crisis paraguaya que concluyó, a través de un golpe de Estado constitucional, con la destitución del presidente Fernando Lugo.

II. LA MISIÓN IMPOSIBLE DEL OBISPO DE LOS POBRES

Menos «protestón» que Hugo Chávez o Rafael Correa y más conciliador que Evo Morales, el presidente paraguayo Fernando Lugo defendía –al menos en un nivel discursivo– una postura progresista que quería a la vez romper con las políticas neoliberales y poner en agenda la cuestión de la redistribución de las riquezas producidas. Actitud que en América Latina obliga inevitablemente a cuestionar los privilegios de la oligarquía terrateniente, la cual posee una influencia política y económica inversamente proporcional a su peso demográfico.

Indudablemente, se trataba de un proyecto demasiado ambicioso. Fue así que, el pasado 22 de junio, solo unos meses antes de unas nuevas elecciones presidenciales, el Senado destituía al exobispo. Un «nuevo estilo» de golpe de Estado que ya contaba con un precedente. En 2009, Honduras fue sacudida por una crisis política que se selló con la expulsión del presidente Manuel Zelaya; esto con el pretexto de su –supuesta– intención de modificar la Constitución para asegurarse la reelección (Bähr Caballero, 2009). No hubo baños de sangre, ni bombardeos al palacio presidencial, sino una embajada norteamericana con una «política de espera» y unas Fuerzas Armadas apiladas en sus barracas; los golpes de Estado de este segundo milenio no tienen nada que ver con los de los años 70. Sin embargo, las razones de estos quiebres democráticos no han cambiado tanto.

² Estamos pensando aquí en las Asambleas Constituyentes, las que dieron lugar a nuevas constituciones en Bolivia y en Ecuador, y también en los presupuestos participativos en Brasil.

En el sitio web de la revista Nueva Sociedad, Lilian Soto (s.f.), ex ministra de la función pública y actual candidata a la presidencia por el movimiento político Kuña Pyrenda, señala que:

El incipiente análisis de la situación legal de las tierras, la inversión en agricultura familiar, la reticencia a aprobar el uso indiscriminado de transgénicos o el timorato control al uso de agrotóxicos que empezaban a ejercer las instituciones estatales, así como la libertad de debatir sobre los procesos de acumulación de la tierra como principal medio de producción en manos de una pequeña élite, no eran temas que la oligarquía paraguaya estuviera dispuesta a soportar de forma imposable.

La excusa para realizar la destitución del presidente fue la muerte de 17 personas (once campesinos y seis policías) durante un conflicto que se produjo por el desalojo de una ocupación de tierras. Varios observadores estiman que se trataba de una operación realizada para deslegitimar la autoridad del presidente y así abrir la vía legal para su destitución basándose en el artículo 225 de la Constitución del país, el cual indica que la Cámara de los Diputados puede abrir un «juicio político» contra un presidente por «mal desempeño de sus funciones».

III. EL SACRILEGIO DE UNA EVENTUAL REFORMA AGRARIA

La cuestión de la tierra es primordial a la hora de tratar de entender la política paraguaya. Tras la explotación esclavista del tanino, seguida por la de la madera y la del mate, el nuevo cultivo milagroso es la soja (preferentemente transgénica). Su exportación sobrepasa ampliamente la de carne, tanto así que Paraguay se ha convertido en el quinto productor —a nivel mundial— de aceite de soja. El cultivo de esta leguminosa está en manos de la oligarquía conservadora —la cual representa 2% de la población pero posee 80% de las tierras—. Este negocio tan jugoso a veces roza la ilegalidad y conlleva otro tipo de actividades —narcotráfico, contrabando, captura de rehenes—. Los intereses políticos de los grandes propietarios son defendidos desde hace más de 60 años; 35 de ellos con la dictadura del Partido Colorado. Este partido ha marcado profundamente la cultura política del país y ha convertido al Senado en uno de los más corruptos de América Latina. La oligarquía también se apoya en un sindicato, La Unión de Gremios de Producción (UGP), que tiene como objetivo hacer de Paraguay el paraíso de las semillas transgénicas, como testifican las presiones ejercidas sobre el gobierno de Lugo para que Monsanto pudiese comercializar sus granos de maíz y de algodón transgénico. La UGP está dirigida por Héctor Cristaldo, persona cercana al grupo Zucolillo, que está asociado a Cargill, otro de los gigantes del *agrobusiness* norteamericano. Propiedad de este mismo grupo, el diario *ABC Color* es el portavoz de los intereses de la oligarquía terrateniente, la cual —no debemos dejar de mencionar— es cercana a la Iglesia católica local.

Un informe sobre el reparto injusto de las tierras escrito por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, y la intención de reformar el sistema de salud para que este fuese gratuito y universal, bastaron para irritar profundamente a la derecha conservadora y que esta forzase la situación para deshacerse de Lugo. «Esto podría parecer poca cosa en Bolivia, Venezuela o Ecuador, pero es suficiente para alertar a las élites de un país vigilado por una

estatua enorme del líder chino anticomunista Chiang Kai-Sheck», explica el periodista Pablo Stefanoni (2012), agregando que:

De hecho, es imposible comprender los recientes acontecimientos que agitaron Paraguay sin tomar en cuenta el anticomunismo profundo y omnipresente de la cultura política de Paraguay, que se expresó en la brutal dominación del Partido Colorado y la permanencia en el poder de Stroessner durante 35 años (Stefanoni, 2012).

Frente a las presiones y tentativas de desestabilización de los sectores conservadores, la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), coalición que condujo a Lugo al poder, se desmoronó rápidamente³. Esta dependía de la participación del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), partido tradicional de derechas al cual Lugo debió conceder la vicepresidencia. De hecho, fue Federico Franco, el vicepresidente, quien sucedió al ex-obispo.

Después de las tentativas de destitución en Venezuela (2002), Bolivia (2008), Ecuador (2010), también Honduras (2009) y ahora Paraguay, América Latina no cesa de debatirse contra sus viejos demonios autoritarios. Como indica el informe del PNUD y de la OEA que se cita más arriba, durante los últimos 20 años, 18 presidentes no terminaron su mandato. Ninguno de ellos había tomado el poder de manera ilegal, es decir que no era su legitimidad la que se ponía en duda sino su gestión política. Publicado en 2010, el informe deploraba la caída del presidente Manuel Zelaya en Honduras y hacía un llamado a la región para crear instrumentos efectivos de prevención y de resolución de las crisis de gobernabilidad y de los conflictos políticos. Tres años después, el golpe de Estado institucional de Paraguay reafirma esta urgencia.

Bibliografía.

- Bähr Caballero, K. (2009). Honduras: coup d'Etat et démocratie. *La Revue nouvelle*, octubre 2009.
- PNUD-OEA (2010). *Nuestra Democracia*. México: Fondo de Cultura Económica, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
- Rouquié, A. (2010). *A l'ombre des dictatures. La démocratie en Amérique latine*. París: Albin Michel.
- Soto, L. (s.f.). *Por qué Paraguay retrocedió 60 años en solo 30 horas*. Extraído el 8 de diciembre de 2012 desde <http://www.nuso.org/opinion.php?id=111>
- Stefanoni, P. (2012). *Le chemin de croix de «l'évêque des pauvres» devenu Président*. Extraído el 8 de diciembre de 2012 desde <http://www.bastamag.net/article2539.html>

³ Fernando Lugo no disponía más que de tres senadores sobre 48 en total, y de dos diputados sobre 24.